

SEPTIEMBRE 29 Y 30 DE 1934

58ª REUNION — 45ª SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES MANUEL A. FRESCO Y ANTENOR R. FERREIRA

DIPUTADOS PRESENTES: Acosta Guillermo, Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Amadeo y Videla Daniel, Ameri Rogelio L., Amoedo Aurelio F., Andreis Fernando de, Aráoz Ernesto M., Aráoz Eudoro D., Arce José, Arnoldi Adolfo, Arrieta Herminio, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Besasso Manuel V., Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F., Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Buitrago Pedro, Bunge Augusto, Bustillo José M., Bayán Marcelino, Cáceres Lorenzo, Cafferata Juan F., Calderón Osvaldo M., Candia Cornelio, Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carreras José, Carús Agustín J., Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Coca Joaquín, Cordero Octavio, Corominas Segura Rodolfo, Costa Méndez Nicenor, Courel Carlos D., Critto Miguel, Dávila Miguel V., Degano Alfredo P., Della Latta Jerónimo, Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Escalera Facundo, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Fresco Manuel A., Ganza Marcelino, Garayalde José María, García Gorostiaga Raúl, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Godfrid Juan, Godoy Raúl, Gómez Rincón Abel, González Benjamín S., González Guerrero Manuel, González Maseda Manuel, González Valentín, Graffigna Santiago, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Gugliamelli Aquiles M., Herrera Bruno J., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Iriondo Urbano de, Jardel Enrique C., Lamesa Juan B., Lencinas Rafael Néstor, Lima Vicente Solano, López Héctor S., Magris Amleto, Manacorda Carlos, Mancini Rafael, Marcó Cipriano F., Martínez José Horiberto, Molina Serapio, Moret Carlos (h.), Morrough Bernard Juan F., Mouchet Enrique, Mounesca Eduardo, Moysichoff Bernardo, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Padilla Tibureio, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palmeiro José, Parera Gregorio, Parodi Misael J., Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pintos Angel, Pita Carlos A., Pomponio Vicente E., Pueyrredon Carlos A., Quiroga Félix, Radio Pedro, Ramiconi Luis, Ramírez Manuel (h.), Repetto Agustín, Rodríguez Alfredo, Ruggieri Silvio L., Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Saravia José M., Schoo Lastra Dionisio, Sollarés Avelino, Simón Padrós Juan, Solari Felipe C., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vicchi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Videla Dorna Daniel, Videla Rodolfo G., Vignart Uberto F., Vionnet Rodolfo L., Wade Eugenio, Zarazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Alonso Alfredo J., Aráoz José Ignacio, Contte José A., Ocampo Enrique, Rojas Marcos E., Rozas José E., Speroni Daniel C., Vallejo Luis A.; CON AVISO: Becerra Eugenio A. (h.), De Miguel Benito, Pressacco Juan P., Repetto Nicolás; SIN AVISO: Ahumada Luis Alberto, Bosano Ansaldo Daniel, Korn Guillermo, Mattos Luis María, Ruiz Guñazú Jacinto, Ruiz Oscar.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Designación de comisiones.
- 4.—Moción del señor diputado Rodríguez, a fin de que sean girados a las distintas comisiones los asuntos entrados.
- 5.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo acompañando los informes relacionados con las causas que han determinado la caducidad de las autoridades comunales de la provincia de Tucumán.

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo acusando recibo de la sanción del proyecto de ley por el que se concede permiso al excelen-

tísimo señor presidente de la Nación para ausentarse de la Capital Federal durante el receso del Congreso.

III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre impuesto a las ventas de mercaderías, frutos y productos, en todo el territorio de la Nación.

IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo eximiendo del pago del impuesto a las transacciones a los comerciantes minoristas desde el 1º de Enero de 1934.

V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación de los impuestos al consumo y prórroga de la vigencia de los impuestos a los réditos.

V

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1934.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo se complace en presentar a la consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley sobre unificación de los impuestos al consumo, que sancionado por vuestra honorabilidad resolvería algunos de los más graves y urgentes problemas nacionales.

Más de cuarenta años han pasado desde que fueron establecidos los impuestos internos nacionales, en época de graves penurias del tesoro, y cuando problemas internos y externos preocupaban seriamente a los poderes públicos. Lo que pareció un recurso de emergencia destinado a desaparecer con las causas que lo motivaron, ha llegado a constituir una de las fuentes de renta más importantes y permanentes de la Nación, de la que no podría prescindir el Estado sin que ello ocasionara una profunda conmoción de sus finanzas, salvo que mediara la total transformación de su sistema rentístico.

Hace también muchos años que las provincias han establecido impuestos sobre los consumos de sus habitantes, aplicándolos generalmente a los mismos artículos gravados por el fisco nacional. Pareció en un principio que esos tributos aplicados por pocos Estados estaban destinados a tener corta vida y a constituir un modesto recurso de las provincias superado en mucho por las otras rentas típicamente provinciales; pero con el andar de los años se ha comprobado que estos impuestos han adquirido carácter general y permanente y que cada día se apoya más en ellos el sistema financiero de las provincias.

Preseindiendo de los impuestos establecidos por las provincias sobre los consumos de sus habitantes, las provincias productoras de artículos como el azúcar, el alcohol y el vino, que no pueden producirse en todo el país, pero que son consumidos por toda la población de la República, han impuesto tributos sobre la producción de esos artículos, o sobre las materias primas o subproductos con que son elaborados, con tanta más facilidad cuanto más protegidos se encontraban esos productos de la competencia extranjera, por efecto de los derechos de aduana.

El resultado de la acción impositiva de la

Nación y de las provincias, es que algunos consumos populares soportan varias clases de tributos: el impuesto interno nacional aplicado al consumo de todo el país, cuyo producido alimenta las arcas federales; el impuesto provincial establecido sobre el consumo provincial, cuyo producido alimenta las arcas de las provincias y el impuesto interno provincial sobre materias de consumo nacional mediante el cual las provincias imponen tributo a la población consumidora de toda la República. Sobre todos esos gravámenes se superponen, además, con frecuencia, impuestos municipales que encarecen los artículos que ya han sido objeto de impuestos por parte de la Nación y de las provincias.

La superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre la misma materia imponible, con ser en sí un mal intolerable, está lejos de ser la peor consecuencia del sistema imperante. Cada día es más patente la tendencia de cada uno de los Estados que forman la Nación a defender su propia producción y a ese efecto se ha dado a los impuestos internos provinciales el carácter de derechos protectores, gravando en forma desigual las mereaderías elaboradas dentro del territorio provincial o fuera de él.

Los serios conflictos ya originados con motivo de la actitud de las provincias que han comenzado a servirse del impuesto como de un arma de política comercial para facilitar el expendio de sus propios productos fuera de sus límites y para trabar la entrada a su territorio de los productos de los demás Estados, no son sino un anuncio de los trastornos de todo orden que pueden surgir de la generalización de esas prácticas.

Hasta ahora son pocos los artículos sobre los cuales las provincias han ejercitado el derecho de establecer impuestos diferenciales, pero nada impide, si el sistema subsiste, que se generalice el procedimiento y que cada una de las provincias llegue a estar rodeada de verdaderas barreras aduaneras, que trabarán el comercio interprovincial y llegarán a dividir profundamente lo que la Constitución y la historia ha querido que constituya un solo territorio, habitado por un solo pueblo.

La Suprema Corte de Justicia Nacional, en fallos que han fijado el alcance de los textos constitucionales en forma probablemente definitiva, ha declarado que tanto la Nación como las provincias tienen derecho a establecer impuestos al consumo; éstas, por no haberlo

delegado en manera exclusiva a la Nación, y la Nación en virtud de la facultad que le ha sido concedida de establecer otras contribuciones que las mencionadas en el artículo 4º de la ley fundamental.

Reconocido a la Nación y a las provincias el derecho de establecer impuestos internos, no es posible evitar los inconvenientes de la doble o triple imposición y no se impedirá la lucha económica entre las provincias sino por vía de convenio entre el Estado central y los Estados autónomos, convenios que centralicen la percepción del impuesto, que den uniformidad a los tributos en todo el país y que garanticen en todo momento tanto a la Nación como a las provincias, la percepción segura de las rentas suficientes para atender sus necesidades más imperiosas.

A juicio del Poder Ejecutivo el mejor modo de llegar a convenios uniformes entre la Nación y las provincias, consiste en la sanción de una ley nacional que establezca impuestos iguales sobre los consumos en todo el país y que distribuya los recursos percibidos por el Estado federal entre él y las provincias que voluntariamente quieran incorporarse al sistema de unificación, renunciando a cobrar impuestos provinciales sobre los mismos productos gravados por la Nación.

Por el proyecto sometido a la consideración de vuestra honorabilidad se crea un sistema que permite a las provincias adherir a la unificación si ven ventaja en hacerlo, pero que les deja la posibilidad de mantener su sistema impositivo actual si así lo desean, en cuanto él haya sido construido en ejercicio de los derechos que corresponden a los Estados federados.

El Poder Ejecutivo cree que para llegar a la deseada unificación basta ofrecer a las provincias la posibilidad de asegurarse los recursos que hoy logran, imponiendo tributos al consumo y darles la certeza de que a medida que crezca la recaudación, por el aumento de la población y por el desarrollo de los consumos, crecerá también en forma equitativa la participación de las provincias adheridas en el total a repartir.

Vuestra honorabilidad apreciará como en las diversas disposiciones del proyecto adjunto se contemplan las necesidades financieras actuales de las provincias, se prevé el incremento de esas necesidades y se fijan reglas para que en el futuro el reparto de los fondos se haga en la forma más equitativa posible.

Por la disposición del artículo 2º, se garantiza a las provincias la percepción de una suma igual a la mayor cantidad recaudada por cada una de ellas por concepto de impuestos al consumo en los años 1932 y 1933. Las provincias necesitan las sumas que hoy perciben y por eso se les asegura su cobro; pero basta un examen superficial del cuadro incorporado a ese artículo para observar que la recaudación comparativa de las diversas provincias es totalmente arbitraria.

Las sumas actualmente recaudadas en cada provincia no guardan proporción con la población que ellas tienen, ni con los consumos que en ellas se efectúan, y no están proporcionadas tampoco a las tasas impositivas vigentes en ellas. La rica y poblada provincia de Buenos Aires tiene establecidos alrededor de la Capital buena parte de sus habitantes, que se surten en el distrito federal y que no pagan por consiguiente los impuestos sobre sus consumos; de donde resulta que no obstante la importancia de ese Estado, y la considerable riqueza media de su población, las sumas percibidas por conceptos de impuestos a los consumos son en ellas relativamente reducidas. En otros Estados la situación geográfica proporciona a buena parte de la población la posibilidad de surtir de efectos sujetos a impuesto fuera de los límites de la provincia o de la Nación, y por eso resulta visible el escaso rendimiento de esos tributos, no obstante la población, la riqueza media y la magnitud de las tasas de impuestos vigentes.

Garantizar por tiempo indefinido a las provincias la percepción de lo que hoy recaudan, sería consagrar para siempre la arbitrariedad hoy imperante. Más justo sería sin duda distribuir el monto total de lo que se recauda en la Nación por impuestos al consumo, teniendo en cuenta índices distintos a los de la recaudación actual. Evidentemente la forma más justa de reparto del producido del impuesto entre las provincias sería el que se hiciera teniendo en cuenta la magnitud efectiva de los consumos en cada provincia. El producido de los impuestos sobre los consumos se distribuiría en forma perfecta si se atribuyera a cada Estado la cantidad que corresponde a los consumos realizados en él; y como la mayor parte de los productos gravados o a gravar con impuestos internos nacionales soportan también impuesto provincial, se ha sostenido, con aparente funda-

mento, que bastaría dividir lo recaudado en cada provincia por la tasa impositiva vigente en ella, para conocer el consumo de artículos gravados en cada provincia y para poder obtener en forma impecable la distribución de las rentas percibidas por el impuesto federal. Uno de los funcionarios de Impuestos Internos ha presentado al Departamento de Hacienda un trabajo meticuloso y meritorio calculando lo que en esa forma correspondería a cada provincia, pero del examen de esa obra resulta visible que no obstante la perfección teórica de ese sistema, las circunstancias antes apuntadas sobre la deficiente percepción de impuestos locales debido a la colocación geográfica de las provincias, priva en absoluto a ese índice de todo valor. La percepción de impuestos sobre el tabaco en la Nación y las provincias muestra la enorme proporción de tabaco que se consume en jurisdicción provincial y que no paga impuesto. La recaudación de la provincia de Buenos Aires vuelve a suministrar en este caso el ejemplo más convincente, pues no es posible concebir que su población consuma la escasa cantidad de cigarros y cigarrillos que denuncia la percepción provincial, comparada con el consumo que aparece en la recaudación de las provincias de Córdoba y Santa Fe, de riqueza semejante, o de provincias más pequeñas y notoriamente menos ricas.

—

Efectuar la distribución del producido del impuesto al consumo entre las provincias conforme a la población de éstas, sería aplicar un criterio bastante aceptable. Es cierto que adaptándolo resultan beneficiadas las provincias más pobres, de consumo por habitante relativamente escaso, pero no puede decirse que ello sea injusto y que la equidad exige dar tanto menos recursos a las provincias cuanto más pobres son. Por lo mismo que se trata de provincias que tienen hoy recursos escasos, debe la Nación contemplar con criterio amplio sus necesidades, permitiendo que salgan cuanto antes de su situación actual y se coloquen al nivel de las provincias más ricas.

El artículo 3º establece la forma como ha de pasarse de la distribución del producido de los impuestos al consumo hecha sobre la base de la recaudación actual a la distribución entre las provincias por población. Cada año se tomaría según el proyecto, 10 % de

lo que cada provincia recauda hoy y se formaría con ello un total a distribuirse entre las provincias conforme a su población, de modo que en 10 años el total que corresponde a las provincias se reparta entre ellas conforme al número de habitantes que le atribuya el último censo aprobado por ley.

La transformación de un sistema de reparto en otro, se haría así en forma gradual y no se producirían trastornos financieros en ninguna provincia, porque la disminución que algunas de ellas por ese concepto pudiera sufrir, estaría más que compensada por el aumento de 10 % por año del total a repartir hasta la distribución en 5 años del 150 % de lo que hoy las provincias recaudan por concepto de impuestos a los consumos. Ese aumento de 10 % es visiblemente mayor que el que puede calcularse por el incremento vegetativo de la población de las provincias, y no es exagerado hasta el punto de crear a la Nación, como entidad, dificultades financieras insalvables.

El cuadro del artículo 5º que resume la consecuencia de la aplicación de los artículos 2º 3º y 4º, muestra palmariamente que todas las provincias saldrían beneficiadas por la aplicación del sistema, e indica en forma precisa las cantidades de que las provincias van a poder disponer en el período comprendido entre los años 1935 y 1939. Sólo se modificarían las cantidades absolutas que allí se establecen, si en el ínterin se efectuara un censo general y él fuera aprobado por el Honorable Congreso.

—

El proyecto contempla en el artículo 8º y siguientes, la situación de las provincias que hoy tienen buena parte de sus rentas provenientes de impuestos establecidos sobre la producción de artículos de consumo nacional. No hay duda de que los impuestos provinciales establecidos sobre los artículos de consumo nacional, protegidos por la aduana federal, importan el establecimiento por las provincias de impuestos a toda la Nación. Esa situación evidentemente no puede eternizarse y por eso en varios proyectos anteriores sobre unificación se han propuesto suprimir, lisa y llanamente, los impuestos a la producción, dando a las provincias afectadas, por un tiempo más o menos reducido una escasa compensación.

El Poder Ejecutivo considera que una solución de ese orden, por fundada que resulte

en teoría, se haría totalmente inaplicable en la práctica y que las provincias que hoy tienen esos impuestos no admitirían jamás voluntariamente un sistema por el cual se las privaría del derecho a percibirlos sin asegurarles un substitutivo de esos recursos. Los impuestos a la producción, en las provincias que los tienen establecidos, constituyen una parte fundamental de su régimen financiero que sólo puede pensarse en suprimirlo en forma muy gradual y tomando la Nación transitoriamente a su cargo buena parte de las deudas que las provincias por razón de lo reducido de sus recursos no podrían continuar soportando.

El proyecto que el Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la consideración de vuestra honorabilidad, garantiza a las provincias lo que hoy percibe por impuestos a la producción, estableciendo un decrecimiento gradual de 5 %, por año, que en buena parte resulta compensado por los mayores recursos que corresponderán a esas provincias por la aplicación de las disposiciones a que antes se ha hecho referencia.

A los 10 años de la aplicación de la ley las provincias percibirían por lo tanto el 50 % de lo que hoy obtienen con el impuesto a la producción, pero el 50 % perdido resultaría en parte compensado por la mayor participación en los impuestos al consumo y en parte por haber tomado la Nación a su cargo deuda pública provincial, que se serviría por la Nación hasta su total extinción. Por otra parte, la población de las provincias productoras resultaría beneficiada al ver desaparecer no sólo los altos impuestos que pesan sobre la producción en esas provincias, sino también los tributos semiprohibitivos que en los demás Estados impiden un gran consumo de los productos gravados.

Las disposiciones contenidas en los artículos 4º, 7º y 8º del proyecto adjunto fijan, pues, en forma clara cuáles son las cantidades absolutas que corresponderá a cada provincia en substitución de los actuales impuestos al consumo y a la producción, haciendo aumentar el total por el juego de un coeficiente que ha de compensar con creces lo que podría corresponder al conjunto de las provincias por el aumento vegetativo de la población y de sus consumos hasta el año 1939.

Establecidas esas bases, se han fijado reglas para que posteriormente a 1939 el incremento en la percepción de la renta se traduzca en un aumento de la parte que corresponde a las provincias. A ello tiende el artículo 10, por el cual se establece que el total percibido por las provincias en los años 1938 y 1939 se comparará con el total percibido por la Nación en el mismo período de tiempo, a fin de establecer en qué forma se repartirá en el futuro entre las provincias y la Nación el total recaudado por ésta por concepto de impuestos al consumo. Después de 1939 la Nación y las provincias correrán, pues, la misma suerte; si la recaudación aumenta, el aumento se dividirá en forma proporcional entre ellas, y si la recaudación disminuye, también soportarán en forma proporcional, la Nación y las provincias, el efecto de la disminución.

Al preparar el proyecto de ley sometido a la consideración de vuestra honorabilidad, el Poder Ejecutivo ha debido preocuparse tanto como del monto a distribuir a la Nación y a las provincias, como de no afectar en lo más mínimo la libre disposición de sus recursos por parte de estas últimas. Someter a los Estados federados a la obligación de solicitar como un favor la entrega de lo que les pertenece, sería inadmisibile. Las provincias deben tener la certeza de que las sumas que les corresponde les serán entregadas sin necesidad de gestión alguna, en forma automática e independiente de la voluntad del poder central. A ese fin se han establecido las diversas disposiciones contenidas en los artículos 14, 16 y 17, que como vuestra honorabilidad podrá apreciarlo aseguran a cada provincia la percepción constante de los recursos que por la ley les serían asignados.

Para disfrutar de los beneficios de la unificación, las provincias sólo necesitan expresar su voluntad en ese sentido, derogando las leyes locales que erian los impuestos actuales al consumo y a la producción. El derecho a percibir una parte de los recursos cobrados por la Nación por concepto de impuestos al consumo es incompatible con el mantenimiento de impuestos que directa o indirectamente graven los consumos y la producción, y el alcance de ese principio está claramente consignado en el artículo 15. Por lo demás, el artículo 19 establece que mientras dure el régimen de la presente ley son absolutamente nulas las leyes

provinciales que establecieran tributos de la especie de aquellos cuya supresión se procura por el proyecto adjunto.

El reparto entre las provincias de las sumas consignadas en las diversas disposiciones de la ley, implica para la Nación un sacrificio pecuniario de que debe ser resarcida por modificaciones de ciertos impuestos existentes y establecimiento de algunos nuevos.

Por separado se somete a vuestra honorabilidad los proyectos referentes a esa reforma fiscal y evidentemente la unificación no sería posible sin la sanción de aquellos tributos. Durante la vigencia del sistema proyectado, esos tributos podrán ser modificados nuevamente, si así lo considera oportuno vuestra honorabilidad; pero en cambio, quedará consolidado por el término de 10 años, el impuesto establecido sobre el azúcar, el vino y el alcohol, pues es lógico que las provincias que se desprenden del derecho a reglar por sí el impuesto que pesa sobre su producción tengan asegurado por cierto tiempo la estabilidad del impuesto nacional sobre esos productos.

Una estimación prudente del producido de los impuestos modificados o proyectados, demuestra que ellos bastarían para subvenir a los desembolsos que deberá hacer el gobierno federal con motivo de la unificación. El cálculo de lo que a las provincias corresponderá, muestra que para éstas la sanción del proyecto se traduciría en un aumento inmediato de sus recursos que se iría acentuando con los años.

El adjunto proyecto por el cual se distribuiría entre la Nación y las provincias el producido de los impuestos a los réditos y a las ventas, si fuera aceptado, acentuaría el proceso de saneamiento de las finanzas provinciales. Con los recursos que en esta forma se le daría a las provincias no sólo podrían prescindir de alguna de las formas de ayuda que hoy les presta la Nación, sino que podrían reiniciar el pago de las sumas que hoy adeudan al Estado Central. Por lo que hace a las deudas de las provincias, el cálculo de los recursos que tienen a percibir de la Nación permite esperar que podría iniciarse un plan de transformación de una parte de ellas que sería para los Estados provinciales altamente conveniente. El Poder Ejecutivo espera poder someter a la consideración de vuestra honorabilidad dentro de un breve término un proyecto sobre esa materia

La estabilización y unificación del régimen tributario de la Nación, el mejoramiento de las finanzas provinciales, el alivio de las cargas impositivas soportado por la población de las provincias, y la seguridad dada a los productores de que pueden dedicar sus energías al amparo de una legislación permanente, serían a juicio del Poder Ejecutivo las consecuencias inmediatas de la sanción del adjunto proyecto de ley.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Federico Pinedo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Las provincias que se acojan a los beneficios de la unificación de los impuestos al consumo, conforme a las disposiciones de la presente ley, participarán en el producido de todos los impuestos internos nacionales, en la forma que se determina en los artículos siguientes:

Art. 2º — Toda provincia adherida al régimen de unificación de impuestos, percibirá durante el año 1935 una suma igual a la mayor recaudación total que hubiere percibido en 1932 o en 1933, por concepto de impuestos al consumo provincial sobre productos gravados con impuestos internos nacionales, aumentada en un 10 %, o sea las siguientes cantidades:

PROVINCIAS	Recaudación	10 %	Total
(En miles de \$ m/n.)			
Buenos Aires	9.495	949	10.444
Santa Fe	6.758	676	7.434
Córdoba	5.339	534	5.873
Mendoza	410	41	451
Entre Ríos	1.727	173	1.900
Tucumán	1.612	161	1.773
San Juan	314	31	345
Corrientes	334	33	367
Santiago del Estero	482	48	530
Salta	1.037	104	1.141
Jujuy	467	47	514
San Luis	342	34	376
La Rioja	118	12	130
Catamarca	92	9	101
	28.527	2.852	31.379

Art. 3º — A partir del 1º de Enero de 1936 se deducirá anualmente a cada provincia adherida al régimen de esta ley, el 10 % de lo

que les corresponde en virtud de lo establecido en el artículo anterior, de manera que la percepción por este concepto será la siguiente:

PROVINCIAS	Recaud. básica 1935	1936 90 %	1937 80 %	1938 70 %	1939 60 %
	(En miles de \$ m/n.)				
Buenos Aires	10.444	9.399	8.355	7.310	6.266
Santa Fe	7.434	6.691	5.947	5.204	4.460
Córdoba	5.873	5.286	4.698	4.111	3.524
Mendoza	451	406	361	316	271
Entre Ríos	1.900	1.710	1.520	1.330	1.140
Tucumán	1.773	1.596	1.418	1.241	1.064
San Juan	345	310	276	241	207
Corrientes	367	330	294	257	220
Santiago del Estero	530	477	424	371	318
Salta	1.141	1.027	913	799	685
Jujuy	514	463	411	360	308
San Luis	376	338	301	263	226
La Rioja	130	117	104	91	78
Catamarca	101	91	81	71	60
	31.379	28.241	25.103	21.965	18.827

PROVINCIAS	1940 50 %	1941 40 %	1942 30 %	1943 20 %	1944 10 %
	(En miles de \$ m/n.)				
Buenos Aires	5.222	4.178	3.133	2.089	1.045
Santa Fe	3.717	2.974	2.230	1.487	743
Córdoba	2.936	2.349	1.762	1.175	587
Mendoza	226	181	135	90	45
Entre Ríos	950	760	570	380	190
Tucumán	886	709	532	355	177
San Juan	173	138	104	69	35
Corrientes	184	147	110	73	37
Santiago del Estero	265	212	159	106	53
Salta	571	456	342	228	114
Jujuy	257	206	154	103	51
San Luis	188	150	113	75	38
La Rioja	65	52	39	26	13
Catamarca	50	40	30	20	10
	15.690	12.552	9.413	6.276	3.138

El conjunto formado por la suma de las cantidades así deducidas se repartirá a partir del 1º de Enero de 1936 entre las provincias adheridas, conforme a la población

que a cada una de ellas asigne el último censo aprobado por ley, correspondiendo a cada provincia, las siguientes cantidades:

PROVINCIAS	1936 10 %	1937 20 %	1938 30 %	1939 40 %	1940 50 %
(En miles de \$ m/n.)					
Buenos Aires	1.085	2.169	3.253	4.337	5.422
Santa Fe	472	944	1.416	1.889	2.361
Córdoba	386	772	1.158	1.544	1.930
Mendoza	146	291	437	583	728
Entre Ríos	223	447	670	893	1.116
Tucumán	175	350	524	699	874
San Juan	63	125	188	250	313
Corrientes	182	364	546	729	911
Santiago del Estero	137	275	412	549	687
Salta	74	148	222	296	370
Jujuy	40	80	121	161	201
San Luis	61	122	183	244	305
La Rioja	42	84	125	167	209
Catamarca	52	105	158	211	263
	3.138	6.276	9.413	12.552	15.690

PROVINCIAS	1941 60 %	1942 70 %	1943 80 %	1944 90 %	1945 100 %
(En miles de \$ m/n.)					
Buenos Aires	6.506	7.590	8.675	9.759	10.844
Santa Fe	2.833	3.305	3.777	4.249	4.721
Córdoba	2.316	2.702	3.088	3.474	3.860
Mendoza	874	1.020	1.165	1.311	1.457
Entre Ríos	1.339	1.563	1.786	2.009	2.232
Tucumán	1.048	1.223	1.398	1.573	1.747
San Juan	376	438	501	563	626
Corrientes	1.093	1.275	1.457	1.639	1.821
Santiago del Estero	824	961	1.099	1.236	1.373
Salta	444	518	591	666	740
Jujuy	241	281	322	362	402
San Luis	366	427	488	549	610
La Rioja	251	293	335	377	419
Catamarca	316	369	421	474	527
	18.827	21.965	25.103	28.241	31.379

Art. 4º — Toda provincia adherida al régimen de esta ley, percibirá a partir del 1º de Enero de 1935, además de las cantidades indicadas en los artículos 2º y 3º, un suplemento que se les distribuirá proporcionalmente por población y que en conjunto, para todas las

provincias adheridas, será en 1935 igual al 10 % de la cifra básica total establecida en el artículo 2º y aumentando en otro 10 % igual cada año posterior hasta el año 1939, en que será de 50 %, o sea en la siguiente forma:

PROVINCIAS	1935 10 %	1936 20 %	1937 30 %	1938 40 %	1939 50 %
(En miles de \$ m/n.)					
Buenos Aires	1.085	2.169	3.253	4.337	5.422
Santa Fe	472	944	1.416	1.889	2.361
Córdoba	386	772	1.158	1.544	1.930
Mendoza	146	291	437	583	728
Entre Ríos	223	447	670	893	1.116
Tucumán	175	350	524	699	874
San Juan	63	125	188	250	313
Corrientes	182	364	546	729	911
Santiago del Estero	137	275	412	549	687
Salta	74	148	222	296	370
Jujuy	40	80	121	161	201
San Luis	61	122	183	244	305
La Rioja	42	84	125	167	209
Catamarca	52	105	158	211	263
	3.133	6.276	9.413	12.552	15.690

Art. 5º — Por aplicación de los preceptos contenidos en los artículos anteriores, las cantidades totales a percibir por cada provincia

adherida al régimen de esta ley durante los años 1935, 1936, 1937, 1938 y 1939, serán las siguientes:

PROVINCIAS	Recau. básica	1935	1936	1937	1938	1939
(En miles de \$ m/n.)						
Buenos Aires	10.444	11.529	12.653	13.777	14.900	16.025
Santa Fe	7.434	7.906	8.107	8.307	8.509	8.710
Córdoba	5.873	6.259	6.444	6.628	6.813	6.998
Mendoza	451	597	843	1.089	1.336	1.582
Entre Ríos	1.900	2.123	2.380	2.637	2.893	3.149
Tucumán	1.773	1.948	2.121	2.292	2.464	2.637
San Juan	345	408	498	589	679	770
Corrientes	367	549	876	1.204	1.532	1.860
Santiago del Estero	530	667	889	1.111	1.322	1.534
Salta	1.141	1.215	1.249	1.283	1.317	1.351
Jujuy	514	554	583	612	642	670
San Luis	376	437	521	606	690	775
La Rioja	130	172	243	313	383	454
Catamarca	101	153	248	344	440	534
	31.379	34.517	37.655	40.792	43.920	47.069

Art. 6º — Durante el tiempo en que alguna provincia no se adhiera a esta ley, no se le tendrá en cuenta al hacer la distribución ni tendrá derecho después a reclamar lo que hubiere podido corresponderle durante el tiempo en que no estuvo adherida.

Art. 7º — Las provincias productoras de vino, alcohol y azúcar que se adhieran al régimen de esta ley, percibirán durante el año 1935 el promedio de lo que en 1932 y 1933 hubieran recaudado por concepto de impuesto sobre esos productos, sobre las materias primas y sus sub-productos.

<u>PROVINCIAS</u>	<u>Recaudación</u>		<u>Promedio</u>
	<u>1932</u>	<u>1933</u>	
(En miles de \$ m/n.)			
Mendoza	15.470	17.638	16.554
Tucumán	4.229	5.074	4.651
San Juan	11.668	9.500	10.584
Santiago del Estero	65	65	65
Salta	56	60	58
Jujuy	1.386	1.320	1.353
	<u>32.874</u>	<u>33.657</u>	<u>33.265</u>

Art. 8º — A partir del 1º de Enero de 1936 las sumas a distribuir a las provincias mencionadas en razón de lo establecido en el artículo anterior decrecerá anualmente en 5 % del pro-

medio básico hasta llegar a ser el 50 % de lo que por esta ley recibieran en 1935, de manera que la percepción será en la siguiente forma:

PROVINCIAS	1936 95 %	1937 90 %	1938 85 %	1939 80 %	1940 75 %
(En miles de \$ m/n.)					
Mendoza	15.726	14.898	14.071	13.243	12.416
Tucumán	4.419	4.186	3.953	3.721	3.488
San Juan	10.055	9.526	8.997	8.467	7.938
Santiago del Estero	62	59	55	52	49
Salta	55	52	49	47	44
Jujuy	1.285	1.218	1.150	1.082	1.015
	31.602	29.939	28.275	26.612	24.949

PROVINCIAS	1941 70 %	1942 65 %	1943 60 %	1944 55 %	1945 y si- guientes 50 %
(En miles de \$ m/n.)					
Mendoza	11.588	10.760	9.932	9.105	8.277
Tucumán	3.256	3.023	2.791	2.558	2.325
San Juan	7.409	6.880	6.350	5.821	5.292
Santiago del Estero	46	42	39	36	33
Salta	41	38	35	32	29
Jujuy	947	879	812	744	677
	23.285	21.622	19.959	18.296	16.633

Art. 9º — Las provincias afectadas por la disminución de impuestos dispuesta por el artículo anterior podrán pedir que la Nación tome a su cargo anualmente deuda consolidada provincial por un importe nominal que equivalga, capitalizado al 5 %, al 20 % de la suma que las provincias dejaran de percibir por ese concepto.

Art. 10. — El promedio de las cantidades totales que por virtud de esta ley reciban todas

las provincias adheridas en los años 1938 y 1939, comparado con el promedio de las cantidades que la Nación haya cobrado para sí durante el mismo tiempo en concepto de impuestos internos unificados, determinará el porcentaje que a partir del 1º de Enero de 1940 corresponderá a la Nación y a las provincias en conjunto del producido total de los impuestos internos unificados. A partir del 1º de Enero de 1940 la cantidad que cada año co-

responda al conjunto de las provincias se distribuirá entre ellas conforme a lo establecido en los artículos anteriores.

Art. 11. — A partir del 1º de Enero de 1940, la distribución de lo recaudado se hará a cada provincia adherida en la siguiente forma: del total que para todas resulte por la aplicación del precepto contenido en el artículo 10 se distribuirán en primer término, las cantidades fijadas dispuestas por los artículos 3º y 8º, y el remanente conforme a la población.

Art. 12. — El pago de los impuestos internos se hará mediante depósito de su importe por el contribuyente en la cuenta «Impuestos internos unificados», que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina, salvo cuando se trate de letras suscritas por los contribuyentes en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 3.764, las cuales deberán ser depositadas por la Administración en dicha cuenta bancaria para que sean levantadas por los deudores. La Administración no recibirá pagos en dinero efectivo, cheques, giros, etcétera, careciendo por lo tanto de validez los que se hicieran en esa forma.

Estos impuestos serán cargados y percibidos por el productor o importador en el acto de salir los productos de fábrica, la Aduana o depósito fiscal, siendo ellos los responsables ante el fisco en la forma que determina la ley número 3.764.

Art. 13. — Cuando un contribuyente no pague a su vencimiento la letra subscripta por impuestos, el Banco de la Nación le remitirá de inmediato a la Administración General de Impuestos Internos para su cobro judicial. Para su pago el contribuyente deberá hacer el depósito de su valor e intereses en la cuenta «Impuestos internos unificados» y presentar como constancia la boleta correspondiente.

Art. 14. — El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente de las sucursales a la casa matriz el saldo que arroje la cuenta «Impuestos internos unificados» y la casa matriz en cumplimiento de esta ley acreditará también diariamente a la Nación y a cada una de las provincias adherentes la cantidad que resulte de dividir el total anual que corresponde a cada provincia por el número de días hábiles del año.

A partir del 1º de Enero de 1940, del total de recaudación diaria se acreditará a la Nación el porcentaje que corresponde según el

artículo 10. La cantidad restante se distribuirá entre las provincias acreditando a cada una de ellas la cuota fija diaria en la fecha establecida por el artículo anterior, y el saldo se distribuirá entre las provincias conforme a la población según el último censo aprobado por ley.

Art. 15. — Las provincias adheridas y sus municipalidades no podrán gravar la producción, fabricación, o consumo de los productos afectados por los impuestos internos nacionales unificados; ni de las materias primas y sus subproductos, cuando se las dedique a ese fin ni en concepto de fiscalización, ni comercialización a los productores y fabricantes de los mismos. Toman igual compromiso respecto de cualquier otro producto alimenticio en estado natural o manufacturado.

Art. 16. — El Banco de la Nación remitirá cada semana al Ministerio de Hacienda de la Nación y al de cada provincia, el movimiento y estado de la cuenta «Impuestos internos unificados» y cualquier informe que con referencia a la misma se le solicite. Al efectuar el reparto del producido del impuesto, entre la Nación y las provincias, conforme a las disposiciones de esta ley, el Banco actuará como mandatario conjunto de la Nación y las provincias, y no podrá por lo tanto dejar de cumplir las obligaciones que le incumben sin orden conjunta de la Nación y de las provincias.

Art. 17. — Si la renta correspondiente a una provincia no fuera acreditada o entregada puntualmente a la autoridad que determine cada provincia, serán responsables de la omisión o demora, el gerente bajo cuya dependencia estén las oficinas encargadas de hacer las acreditaciones o entregas, y los jefes de las mismas oficinas y cualquier funcionario superior que haya ordenado o que no se haya opuesto a esa omisión o demora. Todos ellos serán pasibles de la pena de prisión de 1 a 5 años e inhabilitación absoluta, perpetua, sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas que procedan.

Los gobiernos provinciales están facultados para poner el hecho en conocimiento del procurador fiscal Federal en turno en la Capital Federal, enviándole todos los elementos de juicio, el que sin dilación formulará la denuncia correspondiente ante el juez Federal de la Capital.

Art. 18. — Los vinos genuinos de producción nacional e importados, cuya graduación

alcohólica no exceda de 13%, pagarán como impuesto interno unificado pesos 0,05 moneda nacional por litro y pesos 0,06 moneda nacional, los que sobrepasen esa graduación. El azúcar de producción nacional o importado pagará como impuesto interno unificado pesos 0,02 moneda nacional por kilo. Estos impuestos quedan consolidados en las cantidades expresadas durante el término de diez años.

Art. 19. — La adhesión de las provincias a las disposiciones de la presente se hará mediante una ley que disponga:

- a) La adhesión lisa y llana;
- b) La derogación de todas las leyes y ordenanzas municipales que contraven- gan de cualquier manera a la presente;
- c) La responsabilidad exclusiva de la pro- vincia por cualquier compromiso pre- existente, que signifique exención o moderación de los impuestos o tasas cuyas leyes y ordenanzas sean dero- gadas;
- d) Que todas las autoridades de las pro- vincias estarán obligadas a prestar su amplia colaboración a los funcionarios nacionales destacados en ellas para re- caudar y fiscalizar los impuestos;
- e) Que la adhesión tiene carácter de con- venio.

El derecho a percibir la parte de renta co- rrespondiente quedará perfeccionado desde el día que tenga vigencia la derogación de todas las leyes provinciales y ordenanzas municipales que se opongan de cualquier manera a la pre- sente ley.

Art. 20. — Serán absolutamente nulas y carecerán de fuerza obligatoria las leyes y ordenanzas que en oposición a la presente sancionen o quieran aplicar las provincias ad- heridas o sus municipalidades, desde el mo- mento que hayan perfeccionado su adhesión a esta ley hasta el vencimiento del término que ella determina.

Art. 21. — El impuesto interno nacional a la nafta queda excluido del régimen de dis- tribución de la presente ley. Las provincias adheridas mantienen el derecho de aplicar gra- vámenes al petróleo.

Art. 22. — La duración de este ley se fija en veinte años.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY (1)

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Prorrógase hasta el 31 de Diciembre de 1944 la vigencia del impuesto a los réditos establecido por ley número 11.682.

Art. 2º — El producido del impuesto a los réditos se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las provincias en la siguiente forma:

Años	Nación	Provincia
1935 . . .	90 %	10 %
1936 . . .	89,5 „	10,5 „
1937 . . .	89 „	11 „
1938 . . .	88,5 „	11,5 „
1939 . . .	88 „	12 „
1940 . . .	87,5 „	12,5 „
1941 . . .	87 „	13 „
1942 . . .	86,5 „	13,5 „
1943 . . .	86 „	14 „
1944 . . .	85,5 „	14,5 „

Art. 3º — La parte que corresponde a las provincias se distribuirá entre ellas en la si- guiente forma:

- a) El 30 % de acuerdo con la población que a cada provincia asigne el último censo aprobado por ley;
- b) El 30 % de acuerdo con el monto de los gastos presupuestos;
- c) El 30 % de acuerdo con los recursos percibidos por la provincia cada año inmediato anterior, con exclusión de los provenientes del crédito;
- d) El 5 % de acuerdo con la recaudación del impuesto a los réditos dentro de la jurisdicción de cada provincia, cada año inmediato anterior;
- e) El 5 % de acuerdo con la recaudación del impuesto a las ventas conforme a la misma regla del inciso d), compu- tándose para el año 1935 lo que se haya recaudado en concepto de im- puesto a las transacciones el año 1934.

Art. 4º — El producido del impuesto a las ventas se distribuirá entre la Nación y el

conjunto de las provincias en la siguiente forma:

Años	Nación	Provincias
1935	85 %	15 %
1936	84 "	16 "
1937	83 "	17 "
1938	82 "	18 "
1939	81 "	19 "
1940	80 "	20 "
1941	79 "	21 "
1942	78 "	22 "
1943	77 "	23 "
1944	76 "	24 "

Art. 5º — Para la fijación de la cantidad del producido del impuesto a las ventas que corresponda a cada provincia, se aplicarán las mismas reglas establecidas en el artículo 3º.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Federico Pinedo.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

VI

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1934.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Como se expresa en el mensaje de la fecha por el cual se acompaña el proyecto sobre unificación de impuestos al consumo, para que el mismo pueda ponerse en práctica, será necesario modificar ciertas tasas de los impuestos internos a fin de que la Nación pueda resarcirse de lo que tendrá que entregar a las provincias para que éstas dejen sin efecto los impuestos al consumo y a la producción.

El Poder Ejecutivo cree que se procederá con criterio práctico y se economizarán perturbaciones al comercio y a la industria, sancionando las siguientes modificaciones:

En el impuesto al vino se fijan las tasas de cinco y seis centavos, según sean ellos de trece grados o más, propendiendo así a que no se hagan vinos excesivamente alcoholizados que facilitan los estiramientos en los lugares de consumo. El medio centavo que hoy tiene en el orden nacional se elevaría hasta las tasas mencionadas, lo que es perfectamente factible

sin afectar a la industria, ya que desaparecerían impuestos sensiblemente parecidos de las provincias productoras e impuestos suplementarios, todavía mayores, de las provincias consumidoras. Con ese impuesto el vino tributaría algo menos de lo que hoy fija a la Nación y a las provincias.

Con el tabaco ha debido articularse un nuevo régimen para determinar la unidad imponible en los cigarrillos y en los tabacos elaborados que se expandan en determinados envases. Si el Poder Ejecutivo se hubiera limitado a igualar en todo el país el precio de venta de las marquillas según los precios hoy pagados por los consumidores en las provincias, hubiera elevado el costo de las mismas en la Capital Federal y los territorios nacionales. En tal caso la carga total del mayor impuesto hubiera quedado desplazada hacia los consumidores de los lugares indicados lo que no hubiera sido justo. Con la colaboración de los fabricantes ha podido en cambio ajustarse el proyecto que se somete a la consideración de vuestra honorabilidad. Mediante la reducción del número de cigarrillos en cada paquete, de doce a diez, se propende al aumento de consumo de paquetes de cigarrillos, afectando simultáneamente a todos los consumidores del país, en mayor o menor medida. Como los fabricantes economizan en el costo, están en condiciones de que se les aumente el impuesto de la escala en mínima parte para los cigarrillos de \$ 0.10. moneda nacional, que será en total del 40 %; se fija en 50 % del precio de venta para las marquillas hasta veinte centavos, inclusive, y en algo más para las restantes, en consonancia con las tasas actuales.

La unificación haría desaparecer los impuestos provinciales sobre la cerveza. Ello permite elevar en un centavo y medio el impuesto a la cerveza elaborada con un 70 % de cebada nacional y en dos centavos la que se fabrique fuera de esa condición. En esa forma se impondría al consumo de cerveza el mismo tributo que hoy paga en conjunto a la Nación y a las provincias, al mismo tiempo que se estimularía la utilización de malta fabricada con cebada cultivada en el país ya que aumentaría en un 20 % el margen diferencial que fué fijado por decreto del Gobierno Provisional, de fecha 14 de Febrero de 1931 y que todavía rige. En cuanto al azúcar su impuesto interno sería semejante al que hoy